

DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

135-23.04

Santiago de Cali, 16 de febrero de 2021.

AUTO N° 009
POR EL CUAL SE RESUELVE GRADO DE CONSULTA
EXPEDIENTE SOIF-029-2018

RADICACIÓN N°:	SOIF-029-2018
ENTIDAD AFECTADA:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL
PRESUNTOS RESPONSABLES: (CC) (CARGO)	JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ, identificado con la cedula de Ciudadanía No. 6.427.524 en Calidad de Ex Gerente para la época de los hechos. GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.995.946 en calidad de Sub Gerente Administrativa y financiera para la época de los hechos. LASTENIA VANESEA CASTRO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.111.753.683 obrando como contratista. VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)
CUANTIA DEL DAÑO:	

I. COMPETENCIA

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018 y por el Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, es competente para resolver el Grado de Consulta que regula el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, Modificado por el Art. 132 del Decreto 403 de 2020.

Con fundamento en las normas citadas en precedencia, se procede a resolver el Grado de Consulta respecto del Auto N°508 del 18 de enero de 2021, mediante el cual se resuelve Archivar el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal dentro del expediente SOIF-029-2018 proferido por la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales (Folios 290 - 296).

II. ANTECEDENTES

La Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, recibió oficio CACCI 400 del 18 de enero de 2018, emanado de la Dirección Operativa de Control Fiscal por el cual se remite el hallazgo fiscal No 1, que resultó de la Auditoria con enfoque integral a la Contratación de Prestación de Servicios N° 66, 17, 33, 55, 64 del Hospital Departamental San Rafael Zarzal del Municipio de Zarzal (V), donde se relacionan presuntas irregularidades en La Contratación de Prestación de Servicios N° 66, 17, 33, 55, 64 realizada al Hospital Departamental San Rafael Zarzal del Municipio de Zarzal (V).

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

En el hallazgo fiscal se refiere lo siguiente:

(...)

Se originaron las presentes diligencias mediante Auditoria con enfoque integral a la Contratación de Prestación de Servicios N° 66, 17, 33, 55, 64 realizada al Hospital Departamental San Rafael Zarzal del Municipio de Zarzal (V), por la Sub Dirección Operativa para el Sector Descentralizado de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, periodo

evaluado 01 enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016, dando como resultado el hallazgo fiscal No.1, en el cual el grupo auditor describe los hechos presuntamente irregulares, de la siguiente manera:

“De acuerdo a la redacción del hallazgo estos son los hechos:

Ordenes de Servicio	Fecha Suscripción	Objeto	Valor	Contratista
OPS66-2016	01/12/2016	Prestar el servicio de alquiler de un vehículo destinado al cumplimiento de funciones administrativas de la ese Hospital San Rafael de Zarzal Valle del Cauca	\$6.200.000	CASTRO LASTENIA VANESSA
OPS017-2016	08/04/2016	El Servicio de alquiler de un vehículo destinado al cumplimiento de funciones administrativas de la ese Hospital San Rafael de Zarzal Valle del Cauca	\$18.600.000	CASTRO LASTENIA VANESSA
OPS033-2016	01/07/2016	El servicio de alquiler de un vehículo destinado al cumplimiento de funciones administrativas de la ESE Hospital San Rafael de Zarzal Valle del Cauca	\$ 12.400.000	CASTRO LASTENIA VANESSA
OPS055-2016	01/10/2016	Prestar el servicio de alquiler de un vehículo destinado al cumplimiento de funciones administrativas de la ese Hospital San Rafael de Zarzal Valle del Cauca	\$ 21.000.000	CASTRO LASTENIA VANESSA
OPS064-2016	01/11/2016	El servicio de alquiler de un vehículo destinado al cumplimiento de funciones administrativas de la ESE Hospital San Rafael de Zarzal Valle del Cauca	\$ 6.200.000	CASTRO LASTENIA VANESSA

Etapas pre contractual y post contractual:

Revisados los contratos, de prestación de servicios relacionados en el cuadro anterior, cuyos objetos fueron, prestar el servicio de alquiler de un vehículo, destinado al cumplimiento de funciones administrativas del Hospital, desde el día 8 de abril hasta el 31 de diciembre; con un valor total de \$47.946.652, discriminado mensualmente en \$ 6.200.000; se evidencio que, fue incluido en la factura de cada mes, el pago de rodamiento del vehículo, seguros, impuestos y SOAT, por un valor segregado de \$ 2.500.000; los que se presumen se pagan, una vez en el año.

Incumplíendose presuntamente, los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

Lo anterior, debido presuntamente a una inefectiva Planeación, seguimiento y de manera particular, una ineficiente e ineficaz realización de los pagos sin revisión detallada de los servicios prestados en razón a los contratos.

En consecuencia, se genera un presunto detrimento patrimonial por valor de veinte millones de pesos (\$20.000.000); y la configuración de una presunta falta disciplinaria al transgredir el numeral 1 del artículo 34 y 35 d la Ley 734 de 2002”.

En el Hallazgo Fiscal No.1, el grupo auditor determina como presuntos responsables a los señores **JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.464.168, en calidad de Ex Gerente del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal (V) para la época de los hechos, **GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 29.995.946, en calidad de Sub Gerente del Hospital departamental San Rafael de Zarzal (V) y supervisora de los contratos de Prestación de Servicios N° 66, 17, 33, 55, 64 y **LASTENIA VANESSA CASTRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.111.753.683, en calidad de Contratista.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

135-23.04

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales procedió a la asignación del expediente y avocar conocimiento del mismo mediante Comunicado No. 029-2018 del 21 de febrero de 2018, con el fin de establecer de acuerdo al estudio y análisis del expediente la clase de proceso de responsabilidad fiscal y la actuación a seguir, contando con el apoyo de la Dra. JENNY KATHERIN CARDONA OSPINA Profesional Universitario, quien una vez analizado el expediente SOIF-029-2018, apertura Investigación Preliminar mediante Auto No. 190 calendarado 05 de marzo de 2018, posteriormente mediante Auto Comisorio No. 231 del 24 de abril de 2019 se asigna proceso a la Dra. CLAUDIA LILIANA LOPEZ GONZALEZ Profesional Universitario, quien profiere formalmente auto de Apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 582 calendarado 05 de septiembre de 2019, conforme al Art. 40 de la ley 610 de 2000, quien una vez, analizado el material probatorio necesario, concluye que de acuerdo a las documentales que reposan en el aludido expediente, encuentra que a pesar de que se establezca la presunta existencia de un daño patrimonial a la entidad estatal, así como indicios serios sobre los presuntos autores del mismo, continuo al posterior aporte de pruebas irrefutables de ejecución contractual se debe proferir formalmente Auto de Archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. SOIF 029-2018 conforme al Artículo 47 de la ley 610 de 2000.

IV. ACTUACIONES PROCESALES

Con el fin de esclarecer los hechos presuntamente irregulares, la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales realizó las siguientes actuaciones procesales:

1. comunicado de 21 de febrero de 2018, por medio del cual se asigna el expediente SOIF 029-2018 a la doctora KATHERIN CARDONA OSPINA, para adelantar el análisis, sobre los hechos del acápite pertinente. (folio 124).
2. Auto comisorio de 28 de febrero de 2018 mediante el cual se comisiona a la profesional universitaria JENNY KATHERIN CARDONA OSPINA para que proceda a sustanciar y adelantar las actuaciones pertinentes dentro del procesos SOIF 029-2018. (Folio 126-127).
3. Auto No. 190 de 5 de marzo de 2018, por medio del cual se apertura indagación preliminar. (Folio 128 – 132).
4. Oficio CACCI 1292 de 06 de marzo de 2018, comunica auto de apertura de indagación preliminar al GERENTE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL. (Folio 133).
5. Oficio CACCI 1669 de 23 de marzo de 2018, se solicita información al HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL. (Folio 134).
6. Oficio CACCI 1997 de 11 de abril de 2018, citación a declaración juramentada a la señora Listenia Vanessa Castro. (Folio 137).
7. Oficio CACCI 1998 de 11 de abril de 2018, citación a declaración juramentada a la señora Gloria María Trujillo Villada. (Folio 138).
8. Oficio CACCI 2000 de 11 de abril de 2018, citación a declaración juramentada al señor Juan Carlos Martínez Gutiérrez. (Folio 139).
9. Auto de trámite N° 383 de 02 de mayo de 2018 mediante el cual se reconoce personería adjetiva a un apoderado de confianza de la señora Lastenia Vanessa castro. (folio 203).
10. Auto comisorio N° 621 de 29 de agosto de 2018 por medio del cual se comisiona a la profesional universitaria Claudia Liliana López González para adelantar las actuaciones procesales pertinentes dentro del proceso SOIF 029-2018. (Folio 222-223).
11. Auto comisorio N° 099 de 20 de febrero por medio del cual se comisiona a la profesional universitaria Natali del Carmen Flores Tupaz para adelantar las actuaciones procesales dentro del expediente SOIF 029-2018. (Folio 226-227).
12. Auto comisorio N° 231 de 24 de abril de 2019 mediante el cual se comisiona a la profesional universitaria Claudia Liliana López González para adelantar las actuaciones procesales necesarias dentro del proceso SOIF 029-2018. (Folio 228-229).
13. Auto 582 de 05 de septiembre de 2019 mediante el cual se apertura proceso de Responsabilidad Fiscal SOIF 029-2018. (Folio 230-248).

14. Notificación por aviso de 26 de noviembre de 2019, apertura de proceso de responsabilidad fiscal. Folio 396
15. Auto de trámite N° 186 de 16 de julio de 2020 mediante el cual se determina la suspensión y levantamiento de términos procesales en el Proceso de Responsabilidad Fiscal. (Folio 283-286).
16. Auto N° 067 de 01 de febrero de 2020 por el cual se resuelve archivar Proceso de Responsabilidad Fiscal. (Folio 290-296).
17. Oficio de 15 de febrero de 2021 mediante el cual se remite expediente SOIF 029-18 a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

- Sobre el Proceso de Responsabilidad Fiscal y su Finalidad.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 267 y 268, numeral 5° de la Constitución Política, corresponde a la Contraloría General de la República y a las contralorías departamentales, municipales y distritales “establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”. Ha dicho la Corte Constitucional que el fundamento jurídico de la responsabilidad patrimonial de los agentes frente al Estado no es otro que el de garantizar el patrimonio económico estatal, el cual debe ser objeto de protección integral con el propósito de lograr y asegurar “la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho” (Sentencia C-832 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil), en los términos de lo estatuido por los artículos 2° y 209 de la Constitución Política.

La Ley 610 de 2000 (complementada por la Ley 1474 de 2011) reguló la figura de la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta causen en forma dolosa o gravemente culposa un daño al patrimonio del Estado.

La definición se encuentra en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, que dispone:

“Artículo 1°. Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.

Por su parte, la responsabilidad fiscal se sujeta a un proceso especial regulado por las leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, y es a través del artículo 4, Modificado por el At. 124 del Decreto 403 de 2020, que se define el Objeto de la Responsabilidad Fiscal como:

“Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.

***Parágrafo 1°.** La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.*

Parágrafo 2°. INEXEQUIBLE** El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer responsabilidad fiscal será el de la culpa leve. **Corte Constitucional mediante Sentencia C-619 de 2002.”

En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia 619 de 2002 ha precisado el significado de la responsabilidad fiscal así:

*“La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la protección y garantía del patrimonio del Estado, **buscando la reparación de los daños que éste haya podido sufrir** como consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes*

DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

135-23.04

públicos –incluyendo directivos de entidades públicas, personas que adoptan decisiones relacionadas con gestión fiscal o con funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas particulares por razón de los perjuicios causados a los intereses patrimoniales del Estado.” (Se destaca).

Es pertinente recalcar que el artículo 22 de la misma Ley 610 de 2000, establece sobre la Necesidad de la Prueba como fundamento de las decisiones que se adopten en el proceso de Responsabilidad Fiscal, que en tal sentido prescribe:

“Artículo 22. Necesidad de la prueba. Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso”.

- **Sobre la Decisión de Archivo del Expediente.**

Al respecto de la procedencia de la figura procesal del archivo del expediente, la Ley 610 de 2000, ha establecido en su artículo 16, los presupuestos que se deben presentar para ordenar el Archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, cuyo tenor normativo contempla:

“Artículo 16. Cesación de la acción fiscal. En cualquier estado de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederá el archivo del expediente cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se demuestre que el hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente.”

En igual medida lo dispone el artículo 47 de la misma Ley 610 de 2000, al determinar que:

“Artículo 47. Auto de archivo. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma.”

Tales presupuestos deben ser valorados para establecer su existencia por parte del operador jurídico-administrativo que adelanta el proceso de Responsabilidad Fiscal, para así tomar la decisión que corresponda al respecto, como una medida legal y no así como una actuación subjetiva.

Esta instancia una vez, analizado y valorado el hallazgo fiscal que originó el presente proceso de responsabilidad fiscal y el material probatorio allegado al proceso, que permitió a la Subdirección Operativa de Investigaciones proferir el Auto N°067 del 01 de febrero de 2021 mediante el cual se Resuelve Archivar el Proceso de Responsabilidad Fiscal respecto del expediente identificado con SOIF-029-2018 se permite realizar las siguientes consideraciones:

Sea lo primero establecer que el presunto detrimento patrimonial se generó con respecto a la suscripción de los Contratos de Prestación de Servicios N° 66, 17, 33, 55, 64 -2017 de 2016, entre el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL Valle y Lastenia Vanessa Castro, que tiene por objeto el “El Servicio de alquiler de un vehículo destinado al cumplimiento de funciones administrativas de la ese Hospital San Rafael de Zarzal Valle del Cauca por valor de \$19.715.000,00, el equipo auditor de la Contraloría Departamental del Valle, evidencio que, “fue incluido en la factura de cada mes, el pago de rodamiento del vehículo, seguros, impuestos y SOAT, por un valor segregado de \$ 2.500.000; los que se presumen se pagan, una vez en el año.

Conforme lo anterior, la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales, en aras de investigar el hecho objeto del presunto detrimento patrimonial, estableció un análisis jurídico respecto al cumplimiento del contrato y determinó que no existe detrimento patrimonial alguno, en cuanto evidencia el cumplimiento concerniente a Prestar el servicio de alquiler de un vehículo destinado al cumplimiento de funciones administrativas de la ESE Hospital San Rafael de Zarzal Valle del Cauca.

Así las cosas, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, procede a efectuar una apreciación de las pruebas obrantes en el expediente y la decisión adoptada por la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales, con el fin de verificar que la decisión de archivo del proceso se encuentra debidamente ajustada a derecho y debidamente soportada.

En consecuencia a lo anterior, este operador jurídico evidencia que conforme a los documentos soportes aportados y obrantes en el expediente se evidencia que el objeto contractual se cumplió, por lo que este despacho no puede endilgar responsabilidad contra quienes se vincularon en el Auto de Apertura como presuntos responsables, los señores: JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.464.168, en calidad de Ex Gerente del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal (V) para la época de los hechos, GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA, identificada con cedula de ciudadanía No. 29.995.946, en calidad de Secretario de Hacienda y supervisor de los Contratos de Prestación de Servicios N° 66, 17, 33, 55, 64, LASTENIA VANESSA CASTRO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.111.753.683, en calidad de Contratista.

Aunado a lo anterior, este despacho evidencia la supervisión contractual y su respectiva ejecución, soportada con el acta de inicio calendada 08 de abril de 2016., suscrito por el contratista Lastenia Vanessa Trujillo Villada y el supervisor Gloria María Trujillo, acta de supervisión de 30 de abril de 2016, suscrito por el contratista Lastenia Vanessa Trujillo Villada y el supervisor Gloria María Trujillo quien manifiesta evidenciar soportes del cumplimiento del contrato de prestación de servicio, también obra certificado de cumplimiento de supervisión contrato de fecha 31 de mayo de 2016 suscrito por la señora Gloria María Trujillo, visible a folio 33; por último se evidencia cotización de los estudios previos emanados del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL donde el presupuesto se acoge a lo señalado en la disponibilidad presupuestal.

También es importante darle valor probatorio a la declaración juramentada realizada al señor JUAN CARLOS MARTINEZ ex gerente del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL donde manifiesta "el contratista cobraba el valor que fue pactado de manera global cada mes, solo que en mi opinión para transparencia el decidió discriminar dentro de ese valor ya pactado, algunos alguno de los rubros en los que incurría para la prestación del servicio lo cual si no lo hubiera hecho, no hubiera variado para nada el valor inicial pactado, lo anterior da más fuerza a lo argumentado por la subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales, de no existir un daño al patrimonio del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL.

Ahora bien, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, precisa que con respecto a la observación planteada en el hallazgo fiscal No. 1, emitido por el grupo Auditor de la Contraloría Departamental del Valle, se logró desvirtuar los indicios de Responsabilidad Fiscal sobre los posibles autores o causantes del mismo, dado que el cumplimiento del contrato se hizo mediante actas de supervisión por parte de la funcionaria del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL la señora GLORIA MARIA TRUJILLO.

Por lo tanto, una vez este despacho pudo corroborar que lo dispuesto por la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales, se encuentra debidamente fundamentado y soportado, dejando sin argumentos facticos y jurídicos que permitan determinar que los señores JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.464.168, en calidad de Ex Gerente del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal (V) para la época de los hechos, GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA, identificada con cedula de ciudadanía No. 29.995.946, en calidad de Secretario de Hacienda y supervisor de los Contratos de Prestación de Servicios N° 66, 17, 33, 55, 64, LASTENIA VANESSA CASTRO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.111.753.683, en calidad de Contratista, hayan efectuado una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa, inoportuna o que su conducta haya sido incorrecta o contraria a derecho, debido a que reposa material probatorio que demuestra la no configuración de un daño al patrimonio del Estado con la actividad contractual realizada.

Así las cosas, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, revisado el material probatorio obrante en el expediente, establecen que de las pruebas allegadas al proceso, demuestran que no ha existido detrimento patrimonial teniendo en cuenta que la evidencia probatoria demuestra el cumplimiento de *"El Servicio de alquiler de un vehículo destinado al cumplimiento de funciones administrativas de la ese*

135-23.04

DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Hospital San Rafael de Zarzal Valle del Cauca y que en aras de salvaguardar los recursos públicos se dejaba constancia en el acta de supervisión con material fotográfico que soportaba la ejecución del contrato.

El hecho que da lugar al hallazgo no está determinado por un posible incumplimiento del objeto contratado sino por los valores discriminados en la propuesta del contratista, por concepto de rodamiento del vehículo, seguros , impuestos y soat, los cuales no fueron reconocidos en forma adicional por el Hospital, sino que hicieron parte integral del valor por el cual fue contratado el alquiler de un vehículo, que permitiera a la entidad el cumplimiento de funciones administrativas, sin que la entidad haya discriminado en los estudios previos o en la invitación, que el valor incluía o no los ítem antes descritos, sino un valor total por este servicio, es decir el presupuesto oficial, cosa diferente es que el contratista seleccionado haya presentado una propuesta en la que discriminó sus costos mensuales y en uno de ellos, consagro \$2.500.000, por concepto de “ *rodamiento del vehículo, seguros, impuestos y soat.*”, ítem, que debía considerar en la propuesta económica de su oferta, sin que su propuesta haya sobre pasado el presupuesto fijado por la entidad para contratar, o se haya pagado demás por el hospital, así se desprende de las cuentas de cobro y órdenes de pago de los servicios prestados, los cuales corresponden al valor pactado en cada uno de las ordenes de servicio, como se indica en el siguiente cuadro:

Orden de servicio N°	VALOR	COMPROBANTE DE PAGO	VALOR	SALDO POR LIBERAR
017-2016	\$18.600.000	9147	\$5.443.333	
033-2016	\$18.600.000	9886	\$12.400.000	
055-2016	\$4.546.652	10873	\$10.746.652	
064-2016	\$6.200.000	11194	\$6.200.000	
066-2016	\$6.200.000	9526	\$6.200.000	
		10124	\$6.200.000	
		10444	\$6.200.000	
TOTAL	\$54.146.652		\$53.389.985	\$756.667
TOTAL= VALOR TOTAL CONTRATOS-SALDO POR LIBERAR=				\$53.389.985

Folio 8-11, 15,30, 31,33, 38, 40,42-44, 50-52,67-68, 71-72,119, 185-200

Lo cual evidencia el cumplimiento del 100% de las obligaciones contratadas, por tanto, ante la inexistencia del daño, mal podría este despacho en determinar una responsabilidad Fiscal, cuando los hechos objeto de investigación no cumplen con los elementos de responsabilidad Fiscal como es el daño, en consecuencia, este despacho no analiza los demás elementos que estructuran la responsabilidad fiscal, como es la conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal y el nexo causal, por ende, no hay cabida a la responsabilidad fiscal, por ello, al no configurarse dentro del presente proceso detrimento alguno al patrimonio del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL, y en consecuencia este órgano de control deberá proceder a confirmar la decisión tomada por la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho en virtud del principio de la Buena Fe, Lealtad Procesal, le brinda el valor probatorio que merecen las pruebas debidamente allegadas al proceso, y que permiten demostrar que en la actualidad no se cumple con uno de los elementos de Responsabilidad Fiscal como es la Conducta (dolosa o culposa) y no se puede endilgar alguna responsabilidad fiscal, por el presunto daño patrimonial a los presuntos responsables, en cuanto desaparece el elemento principal de la Responsabilidad Fiscal, como es el DAÑO.

Conforme a lo expuesto, este Despacho encuentra procedente confirmar la decisión de archivo proferida por la primera instancia, dentro del expediente con radicación SOIF-051-2018, en virtud de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000, por haberse demostrado que el hecho no es constitutivo de detrimento patrimonial.

Por último, es importante recordar que la Corte Constitucional, ha sido muy clara al destacar que sólo se puede deducir responsabilidad fiscal cuando efectivamente ha habido daño al erario público, y por ende, las decisiones adoptadas en los procesos de responsabilidad deben tener el sustento suficiente

que acredite su procedencia, en especial cuando de definir la responsabilidad fiscal se refiere; pues así se estableció en sentencia C- 340 del 9 de mayo de 2007, en los siguientes términos:

*“(…) : Esto significa que **sólo puede imponerse responsabilidad fiscal si ha habido daño al erario público**, ya que “la declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal”. “(…)*

Pero es claro, también, que en esas hipótesis la afectación de los intereses patrimoniales del Estado no se produce por el uso indebido per se, sino que sería necesario acreditar, además, el detrimento de los bienes y recursos o, eventualmente, su aprovechamiento indebido, o, en general, la afectación de los intereses patrimoniales del Estado, eventos en los cuales serían estos —detrimento, aprovechamiento indebido o afectación— y no aquel —uso indebido— los elementos constitutivos del daño y la fuente de la responsabilidad fiscal, y el uso indebido, una modalidad de la conducta dolosa o culposa que da lugar a la responsabilidad”.

Por último, esta instancia evidencia que en el transcurso del proceso se garantizó el derecho al debido proceso, derecho de defensa de los presuntos responsables vinculados al proceso de Responsabilidad Fiscal SOIF 029 – 2018, encuentra que dentro del referido proceso, la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales, decretó medidas de embargo y secuestro respecto de los bienes muebles e inmuebles de los presuntos responsables vinculados al referido proceso, en consecuencia esta Instancia, en el deber de generar garantías procesales a los presuntos responsables y no vulnerar derechos; procede a confirmar la decisión de archivo de proceso de responsabilidad fiscal, efectuando la devolución a la Subdirección de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con el fin de que proceda a dar cumplimiento a los ordenados en el numeral segundo del auto No. 583 del cinco de septiembre de 2019.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, en calidad de Instancia de Grado de Consulta de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, Modificado por el Art. 132 del Decreto 403 de 2020, la Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal;

VI. RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:

Confirmar en todas sus partes el Auto N° 067 del 01 de febrero de 2021, mediante el cual se resuelve Archivar el Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado bajo el número expediente SOIF-029-2018 de acuerdo a los argumentos sustentados en precedencia.

ARTÍCULO SEGUNDO:

Ordénese a la Secretaría Común de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, el Archivo Definitivo del expediente que obra bajo el radicado N° SOIF-029-2018.

ARTÍCULO TERCERO:

En el evento en que con posterioridad aparecieren nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo, o se demostrare que la decisión se basó en prueba falsa, se ordenará la reapertura de la actuación fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 610 de 2000.

ARTÍCULO CUARTO:

Notificar mediante fijación en Estados Electrónicos y en la Cartelera de la Contraloría Departamental, lo aquí dispuesto a los señores: JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.464.168 , en calidad de Ex Gerente del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal (V) para la época de los hechos, GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA, identificada con cedula de ciudadanía No. 29.995.946, en calidad de Secretario de Hacienda y supervisor de los Contratos de Prestación de Servicios N° 66, 17, 33, 55, 64 , LASTENIA VANESSA CASTRO, identificada con cedula de ciudadanía No.

8



DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

1.111.753.683, en calidad de Contratista en los Contratos de Prestación de Servicios N° 66, 17, 33, 55, 64 . Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 610 de 2000

ARTÍCULO QUINTO:

Comunicar al Representante legal del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal (V), en la Calle 5 zarzal – Valle del Cauca, la decisión adoptada mediante la presente providencia

ARTÍCULO SEXTO:

Devuélvase el expediente a la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales, a fin de que proceda al levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro decretadas mediante Auto No. 583 del (05) de septiembre de 2019, para lo cual se deberán remitir los correspondientes oficios a las autoridades competentes para que procedan con el cumplimiento de ésta decisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 de la Ley 610 de 2000, Parágrafo 2 Adicionado por el Art. 128 del Decreto 403 de 2020.

ARTÍCULO SEPTIMO:

Contra el presente Auto Decisorio de Grado de Consulta, NO proceden recursos.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Edna Ruth Ovalle Suaza

EDNA RUTH OVALLE SUAZA
Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal

Transcribió	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y Aprobó	Brian Santander Zúñiga Edna Ruth Ovalle Suaza	Técnico Operativo Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal	<i>[Firma]</i>
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

